



DERECHOS HUMANOS

“Pinochet debe incitar a hablar”

El viernes 20 de junio, el presidente de la UDI, Pablo Longueira, concurrió a la residencia del ministro del Interior, José Miguel Insulza, para entregarle la propuesta de su partido sobre Derechos Humanos. Ya un mes antes, había declarado que mantenía reuniones con familiares de detenidos-desaparecidos, lo que le había llevado a materializar una iniciativa —que calificó como la “solución”— tendiente a terminar con el tema y permitir que esos parientes “hicieran el duelo” por sus seres queridos.

Desde ese instante, el revuelo fue grande. Más aún cuando se supo que la proposición contemplaba una reparación económica a cambio del término de los juicios; especie desmentida por la dirigencia UDI, pero corroborada por sus socios de RN, lo que se habría conversado en las reuniones mensuales que ambos miembros de la Alianza por Chile mantenían.

Y todos opinaron, entre otros, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien habló de una propuesta “maciza” y “bien pensada”. Pero ese criterio no duró mucho, porque rápidamente tuvo que retractarse y explicar que no había hecho “ningún comentario específico sobre la propuesta. Lo que dije es que vamos a estudiarla con seriedad, que fue preparada con seriedad, propone sus soluciones, y vamos a ver si las soluciones son las adecuadas”.

En este clima, las proposiciones de los partidos políticos, agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos y credos religiosos llegaban, una tras otra, al palacio de la Moneda. Entretanto, Longueira sacaba sus garras por el cambio de opinión de Insulza —“no han estado a la altura (el Gobierno y la Concertación) de un paso tan importante”—, al tiempo que el Partido Socialista, en su propuesta, hacía un *metu culpa*: “No fuimos capaces de mantener una política consistente de defensa de la democracia, y llegar a acuerdos que hubieran impedido el golpe de Estado”.

El lunes 23 de junio, el presidente Ricardo Lagos se reunió con el abogado y ex miembro de la Mesa de Diálogo, José Zalaquett; la asesora presidencial de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda; la encar-

Varios sostienen que el senador PS José Antonio Viera-Gallo es el “interlocutor” válido en el tema de derechos humanos ante la Moneda. En conversación con *Ercilla*, entrega su visión de los acápites que debieran ser incluidos en un proyecto de ley sobre la materia. Habrá que confrontarlos con los del Ejecutivo para descubrir las “coincidencias”.

gada del Programa de Derechos Humanos del Gobierno, Raquel Mejías; la ex integrante de la Mesa de Diálogo, Elizabeth Lira; el abogado Alvaro Varela; el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, y el ministro de esa cartera, José Miguel Insulza, quienes conforman la Comisión Asesora Presidencial. Este selecto grupo es el encargado de traducir en un proyecto de ley la proposición del Ejecutivo, la que podría contener algunos elementos incluidos en los documentos entregados por los diversos sectores, si lo estima pertinente. En el mes de julio, posiblemente durante la semana del día 7, la ciudadanía podrá conocer esos planteamientos.

EL INTERLOCUTOR

Pero aparte de la citada comisión asesora, hay un parlamentario —muy influyente, comentan algunos— que también está colaborando con el Gobierno, llevando y discutiendo sus ideas y conceptos sobre la mate-



Para el senador Viera-Gallo, quien posa junto a un cuadro pintado por su hija Manuela, estamos frente a “una oportunidad clara” de avanzar a la verdad.

ria. Para muchos, el senador José Antonio Viera-Gallo es “el interlocutor válido” de la Moneda en el tema de derechos humanos.

En entrevista con *Ercilla*, asegura que “no me han nombrado interlocutor. Por años hemos tenido contacto, personalmente y como parlamentario. Soy coautor del proyecto de ley sobre beneficios para reos por terrorismo que hayan cumplido diez años de prisión, por actos cometidos después de 1990. Además, participé en los esfuerzos para determinar elementos de verdad que faltaban, los que dieron origen a la Mesa de Diálogo”.

Senador, en 1990, cuando asumió la Concertación, ¿pensó que sería tan difícil establecer la verdad?

—Pensé que sería peor, que correríamos el riesgo de otros países de América Latina, como Uruguay, donde la ciudadanía se manifestó por una Ley de Punto Final para evitar más conflictos. O como Paraguay y Perú, que recién ahora formaron una comisión de verdad. Es muy difícil después de un

período de dictadura y represión que haya verdad y justicia plena. Todavía las víctimas del holocausto claman justicia.

¿Cree usted que ahora existe un clima político propicio para llegar a la verdad?

—Es imposible ocultar la verdad por mucho tiempo: tarde o temprano se sabe. Hay una oportunidad clara de avanzar en ella. Los jueces están investigando, ahora nos toca avanzar en las atenuantes y en las reparaciones.

¿Qué elementos debería contener, a su juicio, la propuesta del Gobierno?

—En lo penal, para acelerar los procesos y lograr la verdad que falta, establecería una atenuante calificada para quien entregue información relevante, siempre que no haya sido el autor principal, es decir, quien dio la orden. El que aporte datos no debería quedar preso mientras dure el proceso. Además, acogería la propuesta de Gabriel Valdés, de que los mayores de 75 años cumplan presidio domiciliario, bajo la custodia de Gendarmería.



¿Y está de acuerdo con colocar plazos, como lo propone la UDI?

—No estoy de acuerdo con eso. Mantendría los jueces de dedicación exclusiva para que sigan investigando.

REPARACIONES

¿Cómo debería abordarse el tema de las exhumaciones ilegales?

—Creo que el Gobierno no tiene mucho que decir sobre ese tema. No veo por qué. Eso forma parte de las investigaciones judiciales. Son los jueces los que deben resolver. Es lo lógico. Quizás en lo que debería pronunciarse es sobre el tema de las actuaciones.

¿Y las reparaciones para los familiares de detenidos-desaparecidos?

—En lo civil, establecería por ley un reajuste de las pensiones, y extendería algunos beneficios a los familiares que no los tienen. En cuanto a las reparaciones, sería importante favorecer la construcción de monumentos recordatorios en lugares simbólicos, como Pisagua, y nombrarlos monumentos nacionales. Fijaría un monto de indemnización para los familiares de las víctimas, a la cual se pudiera imputar el total de las pensiones recibidas, y para cuya obtención se exigiría la renuncia a cualquier otra pretensión indemnizatoria. Los beneficiarios de pensiones habría que extenderlo también a los afectados por actos terroristas, sean uniformados o civiles. Además, habría que darle estatuto legal al programa Prais (Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud y Derechos Humanos), contemplarlo en la reforma de la salud, y garantizarles la educación a los descendientes.

¿Sólo a los hijos?

—Hijos y nietos también.

En los casos de torturados y exiliados, ¿debería contemplarse algún tipo de reparación?

—Respecto a los torturados, establecería una comisión de alto nivel para que estudie el tema en su globalidad. No soy partidario de más reparación material para los exiliados, pero sí que se explique al país sus efectos y consecuencias, y que se estudie el tema de las pensiones. Muchos de ellos, al regresar, perdieron lo que habían ahorrado por este concepto.

El senador socialista es también partidario de que se otorguen más recursos al Instituto Médico Legal, para que pueda realizar a cabalidad la identificación de los restos. En cuanto a la aprobación de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el Tribunal Penal Internacio-



Felipe González

El senador PS cree que la propuesta de la UDI sobre derechos humanos marca un paso importante: "No podían seguir negando lo evidente", sentenció.



Felipe González

Como "muy atinadas" calificó el parlamentario las declaraciones de "nunca más" pronunciadas por el general Juan Emilio Cheyre.

nal, que sanciona el genocidio y los crímenes de guerra, "los tres debieran ser ratificados, y ojalá contar con los votos de todos", sentenció.

NUNCA MAS

Esta frase se ha hecho recurrente en el último tiempo. Quien más impactó al pronunciarla, fue el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.

¿Cómo visualiza las declaraciones de "nunca más" del general Cheyre?

—Han sido muy atinadas. A él le toca dirigir una institución que estuvo muy vinculada con los hechos, está en una posición difícil, pero desde la época de Izurieta, y con la continuidad de él, el Ejército ha manifestado una actitud de colaboración con la justicia.

¿Cree que las Fuerzas Armadas tienen más información de la que han aportado hasta ahora?

—Como institución, no creo que exista más. Cuando se cometen hechos tan graves,

como asesinatos y torturas, los autores tratan de no dejar rastros, aunque hayan sido parte de una política oficial de organismos represivos.

¿Quién tiene los antecedentes que faltan, entonces?

—Los que saben son los hechores: la Dina, el general Contreras y los miembros del Comando Conjunto que no están en servicio activo.

¿Y qué se puede hacer para que digan lo que saben?

—Además de una presión moral y judicial, el general Pinochet, o alguien por él, si no está en condiciones de hacerlo, debe incitar a estas personas a hablar.

La Mesa de Diálogo, ¿tuvo los resultados que se esperaban?

—La Mesa de Diálogo mostró serias dificultades a la hora de establecer la verdad. Yo le creo a la ministra Bachelet cuando dice que no hay registros oficiales ni información en los cajones de los escritorios.

Senador, ¿no le parece insólito que sea la UDI el partido que repuso el tema de las

violaciones a los derechos humanos en la agenda pública?

—Es un tema permanente, que salta a la luz pública cada tres años. Por diferentes factores, cuando se encuentran cuerpos, por los procesos, declaraciones, etcétera. Lo novedoso de esto es que parte de una intervención del diputado Longueira, y marca un paso importante de la UDI, que no se manifestaba, que no opinaba. Y si lo hacía, era por parte de los victimarios, los militares. Por primera vez toma contacto con un sector de las víctimas.

¿Considera que es una maniobra de la derecha?

—No es una maniobra. Es fruto de una maduración. No podían seguir negando lo evidente. Habrán escuchado el reproche moral de sus conciencias de no haber hecho más por evitar estos crímenes, como lo ha reconocido Longueira. Eran cosas que no se podían seguir negando.

RECONCILLADOS

"Mi firma de expulsión del país —rememora Viera-Gallo— la firmaron Pinochet y (Sergio) Fernández. Como senador, he compartido incluso comisiones, y eso no significa que voy a pensar igual que ellos, pero se puede convivir". El senador aborda un tema que incluye la UDI en su proposición: dejar atrás el pasado.

La UDI, en su propuesta, llama a "borrar rencores"...

—Tenemos que mirar el pasado sin temor y sin ira, a pesar de tener visiones muy distintas. Pero hay que convivir con ellas, como ocurre hoy. No podemos pensar todos lo mismo. Hay que vivir en paz teniendo claro el pasado, y mirar el futuro.

¿Es posible lograr la paz social y la reconciliación de los chilenos a treinta años del golpe?

—Creo que este país está reconciliado. Entiendo por reconciliación una paz social, el respeto a las personas, la concordia cívica y el imperio del Derecho. Lo que importa es que nos respetemos.

Estas son las opiniones del senador PS José Antonio Viera-Gallo sobre el cada día más candente tema de las violaciones a los derechos humanos y las formas de abordarlo con una mirada de futuro. Cuando el país conozca la propuesta del Ejecutivo, es posible que haya muchas coincidencias con lo expresado por el senador en esta entrevista. O, como aseguran algunos, no se tratará de una mera coincidencia, sino de la influencia que tiene el dirigente en las altas esferas de Gobierno. ■

Carmen Gloria Díaz Meléndez